

EQ 582/08.- Recordatorio de deberes legales y Recomendación al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife sobre la resolución de los expedientes disciplinarios incoados a sus colegiados dentro de los plazos legalmente establecidos.

Nos dirigimos nuevamente a V.E. con motivo del expediente de queja que tramita esta institución a instancia de D., bajo la referencia **E.Q. 582/08**, a la que rogamos haga alusión en posteriores comunicaciones.

El reclamante nos planteó en su día el retraso con el que se venía tramitando la reclamación formulada respecto a la actuación de su abogado, la cual fue presentada ante ese Ilustre Colegio en fecha 9 de mayo de 2006. Pese a las reiteradas ocasiones en las que el promotor de la queja se había interesado acerca de su tramitación, no fue hasta el 25 de abril de 2008 cuando recibió comunicación dándole cuenta del archivo por caducidad del expediente disciplinario, si bien se acordaba la apertura de un nuevo procedimiento (E.D.).

Sobre el asunto de referencia se han recibido sendos informes del Colegio fechados el día 2 de octubre de 2008 (r/s nº 2233) y el día 21 de abril de 2009 (r/s nº 807), cuya remisión agradecemos.

De la información facilitada por ese Ilustre Colegio, así como de la documentación aportada por el promotor de la queja, constan en esta institución los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Como ya se ha mencionado, el 9 de mayo de 2006 el Sr. presenta reclamación ante el Colegio referida a la actuación del letrado D. El 24 del mismo mes, el Colegio acusa recibo de su escrito y le comunica que no procede la tramitación de su queja al haber concedido dicho letrado la venia a otro abogado, desvinculándose así del caso.

Con registro de entrada de fecha 27 de octubre de 2006, el reclamante reitera su queja y aporta documentación acreditativa de la misma.

Segundo.- El 30 de abril de 2008 se remite al promotor resolución declarando la caducidad en el expediente disciplinario nº incoado al colegiado habida cuenta que el procedimiento se inició el 9 de mayo de 2006 y que desde entonces no se había dictado y notificado la resolución poniendo fin al mismo. Asimismo se ordena la apertura de nuevo procedimiento disciplinario.

Tercero.- Posteriormente, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, en sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2008 y a raíz de la tramitación del expediente disciplinario adoptó el acuerdo de imponer al colegiado Don la sanción de un mes de suspensión en el ejercicio profesional por infracción grave, notificando dicha resolución a los interesados.

Cuarto.- Dado que el letrado en cuestión interpuso, el 17 de noviembre de 2008, recurso de alzada contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, el 21 de enero de 2009 se dio traslado del mismo al interesado para alegaciones que fueron presentadas el 13 de febrero siguiente. El recurso fue trasladado al Consejo Canario de Colegios de Abogados con fecha de salida de 6 de abril de 2009.

Quinto.- Finalmente, el pasado 30 de junio, el Consejo Canario de Colegios de Abogados remite al reclamante la resolución correspondiente al recurso de alzada, desestimando el mismo y confirmando en todos sus extremos el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de septiembre de 2008, por el que se imponía al letrado la sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía por un periodo de un mes.

A la vista de todo ello, este comisionado parlamentario ha estimado oportuno trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El ejercicio de la potestad disciplinaria respecto a los propios colegiados es una competencia que corresponde a ese Ilustre Colegio de Abogados, según se recoge en los Estatutos del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife [artículos 3 y 5 h] así como en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española del día 25 de junio de 2004.

2.- El citado Reglamento de Procedimiento Disciplinario (en adelante RPD) contiene las normas de procedimiento a las que debe ajustarse el ejercicio de la aludida potestad disciplinaria, siendo éste de aplicación directa o, en su caso, con carácter supletorio, en las actuaciones que para la depuración de la misma realicen los Colegios de Abogados, los Consejos de Colegios de Abogados de las Comunidades Autónomas y el Consejo General de la Abogacía Española.

En todo lo no previsto en dicho texto legal serán de aplicación las normas relacionadas en el apartado 1 de su artículo 1, es decir, la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía Española, adaptado a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), en su vigente redacción, y al Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (en adelante RPS).

3.- Por su lado, el Estatuto General de la Abogacía Española establece la aplicación de la LRJPAC a cuantos actos de los órganos colegiales supongan el ejercicio de potestades administrativas y establece que, en todo caso, tendrá carácter supletorio para lo no previsto en el referido Estatuto (artículo 99.2). Idéntica prescripción se recoge en el artículo 125 de los Estatutos colegiales

Por lo que al presente caso interesa, la referida LRJPAC consagra a su vez el respeto al principio general de eficacia (artículo 3.1), así como la obligatoriedad de cumplir los términos y plazos establecidos legalmente (artículo 47).

4.- Sobre la concreta tramitación del procedimiento, el artículo 4 del RPD determina que: *1.- El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites. 2.-*

La tramitación y las notificaciones se ajustarán a lo establecido en el presente Reglamento y, en su defecto, a lo dispuesto en el Título V, Capítulo III y en el Título VI, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre y en el Estatuto General de la Abogacía.

En este mismo sentido, el artículo 74 de la LRJPAC establece que *el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.*

5.- Salvo que legalmente esté establecido otro plazo, el expediente disciplinario deberá resolverse en el plazo máximo de seis meses. Los supuestos de interrupción de dicho plazo máximo se limitan a aquellos expresamente previstos en la normativa básica del procedimiento administrativo sancionador y en el propio Reglamento (artículo 8.7 RPD).

6.- Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos (artículo 14.2 RPS) siendo que a los mismos les compete adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anomalía en la tramitación de procedimientos (artículo 41.1 LRJPAC)

7.- Al mismo tiempo, el artículo 42.6 de la LRJPAC, contempla la posibilidad de habilitar los medios personales y materiales precisos para cumplir con el despacho adecuado y en plazo, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución.

8.- Formulado recurso de alzada al amparo de lo previsto en el artículo 18 del RPD ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo, ésta deberá elevarlo con sus antecedentes y el informe que proceda, en este caso ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación (artículo 96.2 Estatuto General de la Abogacía Española).

Con referencia a este mismo trámite, el artículo 114 de la LRJPAC, al tiempo que regula el mencionado recurso de alzada, determina en su último párrafo la responsabilidad directa del titular del órgano que dictó el acto recurrido en cuanto al cumplimiento de la remisión en plazo, adjuntando el informe y antecedentes antes señalados.

Respecto al concreto asunto que nos ocupa, resulta excesivo el lapso de tiempo transcurrido entre la formulación de queja por parte del Sr. y la notificación de la resolución del primer expediente disciplinario instruido. Como no podía ser de otra forma, en la misma se acordaba la caducidad del expediente ya que entre uno y otro trámite transcurrieron prácticamente dos años sin que durante ese periodo el interesado recibiese noticias sobre el estado de su reclamación.

Acordada la tramitación de un nuevo expediente disciplinario, éste fue resuelto dentro de plazo, si bien, formulado recurso de alzada respecto al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio, éste se demora nuevamente en la tramitación, ya que, dejando

a salvo el traslado acordado al denunciante para posibles alegaciones, tuvieron que transcurrir prácticamente dos meses entre la formulación de éstas y su efectiva remisión al Consejo Canario de Colegios de Abogados al objeto de adoptar la resolución procedente.

Habida cuenta las circunstancias del presente caso, y teniendo en cuenta que el transcurso del tiempo afecta desfavorablemente a los ciudadanos que acuden a esa Corporación profesional en demanda de actuaciones respecto a posibles vulneraciones de la deontología profesional, ya que se sienten defraudados, no sólo por la vulneración que denuncian, sino también por el retraso en su actuación, lo que demora igualmente el inicio, en su caso, de otras acciones legales por parte de los interesados, en atención a todo ello hemos acordado, en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de la Ley Territorial 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, reiterar a V.E el siguiente

Recordatorio de deberes legales:

-De tramitar y resolver los expedientes disciplinarios cuya incoación tiene reglamentariamente encomendada, dentro de los plazos legalmente establecidos, de acuerdo con los principios de celeridad y eficacia que deben presidir su actuación en esta materia.

A tal efecto le recomendamos:

-Eliminar cualquier impedimento para la normal tramitación de los referidos expedientes, habilitando, a tal efecto, si así procediese, los medios materiales y humanos que permitan el despacho adecuado y en plazo.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 37 de nuestra Ley reguladora, le rogamos nos comunique los actos adoptados como consecuencia de la presente resolución o, en su caso, el juicio que la misma le merece, todo ello en un plazo prudencial para poder ofrecer así, conjuntamente, un mejor servicio al ciudadano.